

COMENTARIO GENERAL

Situación política

El 17 de octubre el Parlamento griego aprobó el primer paquete de reformas de la nueva legislatura, un compendio necesario para poder obtener un nuevo tramo del tercer rescate y punto de partida para una serie de medidas fiscales y cambios estructurales que deberán aplicarse próximamente.

El proyecto fue aprobado por los votos de la coalición de Gobierno (la izquierdista Syriza y los Nacionalistas Griegos Independientes), mientras que toda la oposición votó en contra salvo en algunos artículos aislados.

En su intervención ante el pleno, el Primer Ministro, Alexis Tsipras, afirmó que el paquete no incluye ninguna medida que no se conociera ya en agosto cuando se firmó el rescate y aludió con ello a que la oposición entonces votó a favor y ahora lo hizo en contra. Con ello se refirió a que los partidos que en esta ocasión han rechazado darle su apoyo fueron los que en verano le ayudaron a sacar adelante el rescate, que no habría podido firmarse sin el respaldo de la oposición ante el elevado número de disidencias dentro de Syriza.

El paquete de medidas, cuya aprobación es requisito para obtener 2.000 millones del rescate de 86.000 millones de euros, contiene una docena de reglamentos acordados con los acreedores que básicamente apuntan a mejorar los ingresos del Estado, aumentar la edad de jubilación y luchar contra la evasión fiscal.

Entre las iniciativas aprobadas figura un aumento de los intereses, del 3% al 5%, para los ciudadanos que se acogieron a la posibilidad de devolver a plazos sus deudas al Estado, un instrumento aprobado durante el primer Gobierno de Tsipras que ha tenido un gran seguimiento.

La denominada cuadriga de acreedores -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional-, había exigido endurecer las condiciones de devolución.

Un artículo que fue eliminado del borrador de ley, tan solo un día después de remitirse al Parlamento, es el que preveía aumentar en dos puntos porcentuales la tasación de las rentas de alquileres.

El aluvión de críticas que causó esta medida llevó al Ejecutivo a dejar los impuestos como estaban.

En el marco de la lucha contra el fraude fiscal se introducen penas de cárcel de un mínimo de 2 años para cantidades no declaradas del IVA que superen los 50.000 euros, y de más de 100.000 euros en el impuesto sobre la renta, con la posibilidad añadida de embargar la mitad de los depósitos bancarios para casos de evasión que superen los 150.000 euros.

En cuanto a la edad de jubilación, la nueva ley contempla el aumento progresivo hasta los 67 años como regla general, y hasta los 62 años para todas las personas que hayan cotizado 40 años.

A primeros de noviembre el Parlamento deberá aprobar un segundo paquete, del que depende el desbloqueo de otros 1.000 millones de euros y cuyo potencial conflictivo es mucho mayor que éste. En él se deberán regular, entre otros aspectos, la gestión de la cartera de créditos morosos de los bancos y la posibilidad de proceder a ejecuciones hipotecarias -algo a lo que el Gobierno se niega en rotundo-; la eliminación gradual de los privilegios fiscales de los agricultores, o la fusión de todas las cajas de pensiones.

Ambos compendios de medidas son necesarios para que pueda comenzar en noviembre la primera evaluación del programa de rescate, de cuyo resultado dependerá que Grecia pueda obtener los fondos para recapitalizar a su banca, y que pueda abrir el debate sobre el alivio de la deuda, dos asuntos que a juicio de Tsipras son de capital importancia

La Comisión Europea recordó que Grecia tiene que cumplir con los objetivos exigidos para recibir nuevos desembolsos, tanto los ya adoptados como los que ha de negociar con sus acreedores, que se desplazaron a Atenas para iniciar conversaciones y determinar si las medidas adoptadas están en línea con los objetivos marcados.

Las negociaciones sobre el segundo paquete tuvieron lugar inmediatamente después de la aprobación del primero y han incluido cuestiones tan delicadas como una reforma del sistema fiscal, así como del de pensiones, y una mayor liberalización del mercado laboral.

Los jefes de misión de las cuatro instituciones conocidas como la Cuádriga -Comisión Europea, Banco Central Europeo, MEDE y Fondo Monetario Internacional- llegaron a finales de mes para tratar con las autoridades griegas «sobre el progreso en la aplicación del programa, con especial atención al cumplimiento de los objetivos intermedios y a las perspectivas de la primera revisión». Esta primera revisión, prevista en principio para finales de octubre, se ha retrasado hasta mediados de noviembre.

Situación económica

Grecia cerrará 2015 inmersa en la recesión, tras la tensión con los acreedores y la imposición de unos controles de capitales que seguirán lastrando la economía helena el próximo año, según los últimos cálculos de la Comisión Europea (CE).

Las previsiones macroeconómicas de otoño de la CE recuerdan que en 2014 Grecia había logrado recobrar el "impulso", que se perdió durante las difíciles negociaciones entre el primer Gobierno de Alexis Tsipras y sus socios europeos, la convocatoria de un referéndum en junio y el vencimiento del segundo rescate al país sin un acuerdo.

La subsiguiente imposición de vacaciones bancarias y controles de capitales «tendrán efectos duraderos en la economía», aunque la nota positiva la ha puesto el sector del turismo, que se ha «comportado excepcionalmente bien por segundo año consecutivo», explicó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Pese a ello, «se espera que Grecia vuelva a deslizarse a la recesión este año, con una contracción del PIB del 1,4%, aunque esto es casi un punto porcentual mejor de lo que esperábamos en agosto», cuando se llevaron a cabo los análisis económicos previos a la concesión del tercer rescate.

Moscovici recordó que se espera que la economía griega continúe su retroceso en 2016, cuando se espera que se contraiga un 1,3%, y que no recupere el pulso hasta mediados de 2017. Aseguró, sin embargo, que Grecia tiene la posibilidad de "repuntar"

en el segundo semestre de 2016 y, “con mucha fuerza”, en 2017, aunque la “precondición” es que se lleven a cabo reformas y entren en vigor.

El Comisario insistió en la importancia de que el Gobierno de Tsipras complete ya el primer paquete de “metas”, que contiene 48 medidas.

Esto permitiría que se tomara una “decisión positiva” en el Eurogrupo para desembolsar 2.000 millones de euros a Grecia, dijo Moscovici, quien instó también a Atenas a continuar los trabajos sobre el segundo paquete de “metas”, que permitirá el pago de otros 1.000 millones.

También recalcó la importancia de llevar a cabo la primera revisión de las condiciones asociadas al programa de rescate a Grecia, que debería haber empezado en octubre, así como de culminar la recapitalización de los bancos griegos antes de fin de año.

La primera revisión está ligada a las discusiones que Grecia quiere mantener con sus acreedores para obtener medidas de alivio de su deuda pública, que Tsipras exige en la forma de una quita rechazada de plano por sus socios.

Las previsiones macroeconómicas muestran que la Comisión espera que la deuda helena llegue al 194,8% del PIB este año, para continuar aumentando hasta doblar la talla de la economía griega en 2016 (199,7%), y comenzar a reducirse en 2017 hasta el 195,6%.

El desempleo seguirá por encima del 25% este año y el siguiente, en el que aún aumentará una décima hasta tocar techo en el 25,8% y reducirse al 24,4% en 2017.

Respecto al déficit público, Grecia es uno de los tres países que, junto Francia y España, tendrá su desvío por encima del límite europeo del 3% del PIB el próximo año, según la CE.

En concreto, cerrará este ejercicio en el 4,6%, el siguiente en el 3,6% y 2017 en el 2,2%.

Por su parte, el Instituto económico griego IOBE, uno de los mayores del país y afín a la patronal, prevé que la economía helena se contraerá este año menos de lo previsto inicialmente, gracias al buen desempeño durante el segundo trimestre.

En su informe trimestral, el IOBE estima que el producto interior bruto (PIB) griego se contraerá entre el 1,5% y el 2% en 2015, medio punto por debajo de lo previsto en julio pasado. La mejora se debe sobre todo a que el turismo registró cifras favorables durante los primeros seis meses. Se espera que el sector cierre el año con un nuevo récord, tanto en llegadas como en ingresos, a pesar de los contratiempos que acarreó la imposición durante tres semanas de un corralito y de los controles de capital todavía vigentes.

Según los datos publicados por el Banco de Grecia, los ingresos por el turismo crecieron en los primeros seis meses del año el 9,5% hasta 4.171 millones de euros, un incremento que todavía no tiene en cuenta los meses de la temporada alta. Los prestamistas internacionales de Grecia ven la contracción de la economía en el 2,3% este año y el 1,3% para 2016.

En cuanto al paro, IOBE estima el desempleo en 2015 se situará en el 26%, medio punto por debajo del índice de 2014.

La balanza comercial griega registró en los primeros nueve meses del año un déficit de 12.640 millones de euros, lo que supuso una caída del 19,3% respecto al mismo periodo de 2014, según los datos provisionales publicados por la oficina helena de estadísticas (Elstat).

El valor de las importaciones en este periodo fue de 22.244 millones de euros, lo que constituyó un descenso del 6,1%.

Las exportaciones disminuyeron un 4,4% hasta sumar 19.271 millones de euros. Las importaciones, por su parte, cayeron un 10,9% hasta los 31.911 millones de euros.

En el mes de septiembre, el déficit comercial cayó un 24,2% en comparación con el mismo mes de 2014, hasta sumar 1.551 millones de euros. Las importaciones descendieron un 18,3% hasta un total de 3.563 millones de euros, mientras que las exportaciones cayeron un 13% hasta 2.011 millones de euros.

El Ministro adjunto de Finanzas, Yorgos Juliarakis, declaró a finales de mes que los controles de capital, impuestos en junio pasado, podrían ser completamente levantados a partir del segundo semestre del año próximo.

Juliarakis hizo esta estimación durante su intervención en la comisión parlamentaria de Finanzas en la que se debatía la ley de presupuestos generales del Estado para 2016.

Consideró, además, que la recesión en 2015 alcanzará el 1,4% del producto interior bruto (PIB), muy por debajo del 2,3% inicialmente previsto.

Las estimaciones de Juliarakis son cercanas a las del instituto económico IOBE. Según Juliarakis, lo más importante de los presupuestos para 2016 es que el objetivo de superávit primario "está limitado al 0,6% del PIB, muy por debajo del 4,5% previsto en el segundo plan de rescate".

«Esta diferencia es del orden de 7.500 millones de euros», añadió y precisó que, gracias a la reducción de esta cifra, el Gobierno evitará tener que aplicar recortes.

Juliarakis recalcó que el texto inicial de los presupuestos tiene tres objetivos: instaurar un equilibrio estable de las finanzas públicas, destinar fondos a la lucha contra la crisis humanitaria y a la mejora de la sanidad e incentivar las inversiones.

Tras seis años consecutivos de recesión en los que Grecia ha perdido el 25% de su PIB, el país registró un ligero crecimiento del 0,3% en 2014, que continuó en el primer semestre de este año, pero el cierre de los bancos el 29 de junio y la imposición de controles de capital cambió la tendencia.

Situación social

El plan para el crecimiento y el empleo en Grecia, que cuenta con una inversión de 35.000 millones de euros, entro en vigor a mediados de mes, después de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE lo aprobaran y firmaran.

En el marco del tercer rescate a Grecia se acordó también un plan de 35.000 millones de euros del presupuesto de la UE hasta 2020, de los que 20.600 millones serán de los fondos estructurales y de inversión europeos.

Un total de 800 millones de euros se desembolsarán la próxima semana. En el marco de ese plan, casi 1.400 millones de euros se entregarán en 2015 y 1.000 millones en 2016.

Estas medidas permitirán a Grecia gastar unos 2.000 millones de euros menos en su presupuesto nacional.

La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, recordando su visita a Grecia para abordar la implementación de este plan con el Premier Tsipras, afirmó que esas medidas «son un fuerte mensaje de la solidaridad europea. Depende ahora de nuestros socios griegos hacer su parte del trabajo y garantizar el mejor uso de los fondos europeos sobre el terreno».

El plan para el crecimiento y el empleo para Grecia pretende acompañar el paquete global de reformas acordadas entre el Gobierno heleno y la Comisión y los acreedores internacionales en el marco del tercer rescate.

En protesta contra las medidas acordadas con los acreedores, la Confederación de sindicatos del sector privado de Grecia, GSEE, convocó una huelga general de 24 horas para el 12 de noviembre.

La GSEE criticó las reformas que hacen parte del primer paquete pactado por el Gobierno de Alexis Tsipras con Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional.

Al poner en vigor estas políticas, declaró el presidente de la GSEE, Yanis Panagópulos, «la Seguridad Social deja de ser general y redistributiva y pasa a ser un simple programa de seguro que ofrece ayudas sociales para la pobreza».

El sindicato insistió en que los trabajadores y sus representantes no pueden «permanecer pasivos ante las medidas que se aplicarán en el futuro».

La GSEE aseguró que estas reformas “incrementan los impuestos y eliminan todos los derechos laborales”, lo que conlleva “el aumento dramático del desempleo”.

Según Panagópulos, los aumentos de impuestos han asfixiado a los trabajadores y pensionistas y han provocado “desigualdades sociales enormes”.

“No podemos esperar que la solución llegue del cielo”, sentenció Panagópulos tras la reunión que tuvo con la ejecutiva de su sindicato.

También la Confederación de sindicatos del sector público de Grecia (ADEDY) se sumó a la convocatoria de huelga para el 12 de noviembre. ADEDY critica al Gobierno por no haber elaborado «una política eficaz para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social».

En un comunicado, indica que el Ejecutivo «aceptó jugar el papel de la gestión y redistribución de la pobreza», lo que conlleva «una responsabilidad histórica con la situación de millones de trabajadores y jubilados, así como de las generaciones futuras». La huelga del 12 de noviembre ha sido calificada como «la primera etapa de una lucha» que busca «impedir que la Seguridad Social sea completamente derrumbada y reivindicar un sistema que amplíe los derechos de los asegurados y garantice sus prestaciones», según el sindicato de funcionarios.